

KOLUMBIEN

DR. HUBERT GEHRING
MARGARITA CUERVO

Mai 2013

www.kas.de/kolumbien

Colombia: un largo y difícil camino hacia la paz

CON CINCO DÉCADAS DE CONFLICTO ARMADO INTERNO, EL GOBIERNO NEGOCIA UNA VEZ EL FIN DE LA CONFRONTACIÓN CON LAS FARC. MIENTRAS LOS DIÁLOGOS AVANZAN, APARECEN SABOTEADORES DE UN PROCESO QUE APENAS ES EL COMIENZO DE UN LARGO CAMINO HACIA UNA PAZ DURADERA.

Un proceso que avanza entre la esperanza y el escepticismo

Tras reconocer en agosto de 2012 los diálogos exploratorios de paz con las FARC, el gobierno Santos se apresuró a dar un plazo máximo para llegar a un acuerdo entre las partes: noviembre de 2013. Con esta fecha en la mira, la intensidad y la velocidad de las conversaciones se han hecho evidentes, recibiendo tanto voces de apoyo como críticas. Las posiciones de expertos, políticos y la misma población podrían dividirse entre quienes expresan un optimismo cauteloso y sin ingenuidad recordando experiencias del pasado; y quienes ven el proceso con gran escepticismo aludiendo a que “no se negocia con terroristas”. Pero con todo esto, la percepción de unos y otros es la misma: es muy probable que el gobierno llegue a algún acuerdo con las FARC y, de hecho, quienes participan de las negociaciones afirman que han comenzado a avanzar en la construcción del texto del acuerdo –una diferencia respecto al pasado que se suma a otras que ha marcado este proceso.

Además del límite de tiempo, otro aspecto que marca un contraste respecto a experiencias anteriores es que existe una agenda muy concreta y restringida, con cinco puntos acordados entre las partes: política integral de desarrollo rural, participación política, terminación del conflicto armado, solución del problema del narcotráfico, y víctimas. Aunque existe una gran reserva para garantizar la confidencialidad de los diálogos en La Habana, el asunto sobre el

cual tanto Gobierno como FARC declaran que hay mayores avances es el primero –y

tal vez el más complejo: tierras. Con altos niveles de concentración de la propiedad rural y el amplio reconocimiento de que el país necesita una reforma transformadora que impulse el desarrollo desde el campo, no extraña el grado de prioridad que se le dio a este asunto. Sin embargo, muchos coinciden en que lo que se acuerde en este sentido no serán precisamente medidas estructurales, pues para eso se requerirían medidas y tiempos que no coinciden con los que se han puesto para finalizar los diálogos.



Fuente: Presidencia de la República de Colombia

Ahora bien, el ritmo impuesto por el Gobierno no fue bien recibido por las FARC, quienes a través de su jefe negociador, Iván Márquez, han expresado en repetidas ocasiones que aunque están dispuestos a dinamizar el proceso y tienen voluntad de paz, no están de acuerdo con esta modalidad de “paz express”. De igual forma, desde

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

KOLUMBIEN

DR. HUBERT GEHRING
MARGARITA CUERVO

Mai 2013

www.kas.de/kolumbien

el comienzo del proceso han solicitado la participación de la sociedad civil en los diálogos. El Gobierno, que se mantuvo firme en no incluir un representante de este sector en la mesa de negociación, sí accedió a promover foros y diálogos regionales en Colombia –paralelos e independientes de lo que ocurre en La Habana– en los que se abre el espacio para la participación de la sociedad civil. Prueba de esto fue el foro agrario de diciembre de 2012, encomendado por el Gobierno a la Universidad Nacional y el PNUD. Más de 1.200 personas participaron, discutiendo propuestas sobre el tema de desarrollo rural. En enero de 2013 los organizadores del foro presentaron al Gobierno su resultado: más de 400 propuestas que deberán revisar y tener en cuenta quienes están discutiendo en La Habana. Por su parte, la Comisión de Paz del Congreso ha organizado mesas regionales de paz, ejercicios plurales que buscan recoger las propuestas de cientos de organizaciones civiles en nueve zonas priorizadas, para después entregárselas a la mesa de negociación. Las FARC se han pronunciado positivamente acerca de estos esfuerzos, pero otros sectores manifiestan que sólo son intentos de la guerrilla para dilatar el proceso.

Lo que sí es cierto es que luego de la sexta y más reciente ronda de diálogos en Cuba, los representantes de ambas partes regresaron a Colombia con actitud esperanzadora y coincidieron en un buen balance: el proceso avanza a buen ritmo y es viable llegar a un acuerdo.

Conforme avanzan las negociaciones, incrementa el sabotaje y los obstáculos

Pero no todo han sido avances y, como era de esperarse, un proceso tan complejo suscita acciones por parte de sectores que están en contra o que quieren sacar provecho de la posibilidad de ejercer presión en este escenario. Paradójicamente, el sabotaje más duro ha venido de la misma guerrilla en proceso de negociación. Las FARC anunciaron en noviembre de 2012 un cese al fuego unilateral de dos meses como muestra de su voluntad de paz. Sin embargo, luego de terminar este periodo de tregua, el balance fue de 57 acciones armadas ejecu-

tadas por las FARC contra la población y la Fuerza Pública. Esto puso en evidencia que la guerrilla estaría dividida y que no todos los frentes estarían representados en la mesa de negociaciones. Expertos coinciden en que el Bloque Sur, el Bloque Occidental y algunos frentes en el Pacífico estarían en abierta oposición al proceso por contar con enormes recursos financieros al estar ubicados en zonas cocaleras o corredores estratégicos para el tráfico de cocaína. Adicionalmente, tras finalizar el cese al fuego unilateral, el Ejército ha expresado su preocupación porque la compra de armas por parte de las FARC ha aumentado durante el proceso y por la abierta intención de la guerrilla de continuar secuestrando a miembros de la fuerza pública como “prisioneros de guerra”.

Por su parte, el ELN –el otro grupo de guerrilla que aún existe y opera en Colombia– parece querer ganar protagonismo y también ha participado en acciones que perjudican el proceso. Tal vez el hecho más notorio ocurrió a comienzos de febrero de 2013, cuando se dio a conocer el secuestro de dos ciudadanos alemanes por parte del ELN en una zona cercana a la frontera con Venezuela. El ELN tradicionalmente ha recurrido al secuestro de funcionarios de multinacionales petroleras –como lo hizo a finales de enero de 2013 con un ciudadano canadiense–, pero en esta ocasión manifestó que la razón para retener a los alemanes es que serían espías. Estas declaraciones fueron mal recibidas y negadas por el Gobierno y la opinión pública en general, pues se trata de dos personas jubiladas que habrían ingresado al país como turistas. Recientemente se conoció que el ELN estaría dispuesto a liberarlos si se establece una comisión –integrada, entre otros, por el CICR– para interactuar con el grupo guerrillero. En todo caso, es evidente la intención del ELN de presionar para participar en negociaciones con el Gobierno, mostrando su “fortaleza” con secuestros, extorsiones y ataques a la infraestructura petrolera.

Por otro lado, hay sectores que desde un comienzo se han opuesto abiertamente al proceso, manifestando que no se debe negociar con criminales ni terroristas. El ex presidente Uribe encabeza este grupo de

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

KOLUMBIEN

DR. HUBERT GEHRING

MARGARITA CUERVO

Mai 2013

www.kas.de/kolumbien

oposidores del proceso; constantemente replica a través de su cuenta de *twitter* y de declaraciones públicas noticias de orden público que den cuenta de hechos de las FARC en contra de la población o la fuerza pública. Algunos analistas afirman que se trata de una estrategia política de cara a las elecciones de 2014, pues tanto Uribe como sus partidarios –el movimiento Puro Centro Democrático– han coincidido en señalar el proceso como un engaño y criticar a Santos por su “permisividad” con las FARC. En fin, la bandera de la propuesta uribista para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias es recuperar la seguridad y, por lo tanto, se basará en la oposición a las negociaciones. Otro de los detractores es José Félix Lafaurie, uno de los precandidatos presidenciales del Puro Centro Democrático y quien además es presidente de Fedegean –la federación de ganaderos de Colombia. Lafaurie ha afirmado desde el inicio que el proceso “no va para ninguna parte” y que en caso de que se firmara un acuerdo, sólo serviría para dar impunidad a los guerrilleros y lavar los activos del narcotráfico. También se opuso al foro agrario de diciembre de 2012, declarando que era inútil y no asistió pues con eso, según él, sólo respaldaría a los victimarios.

En todo caso, en el país hay un clima de opinión bastante hostil frente a las FARC. Las encuestas muestran una mayoría amplia (más del 70%), que está a favor del proceso de paz; pero la gran mayoría desconfía de las FARC (93% de desfavorabilidad) y un 76% considera que está empeorando el problema de la inseguridad. Sin embargo, el Gobierno también se ha visto afectado en las encuestas más recientes: la favorabilidad de Santos bajó a 47% y, con ello, es posible que el presidente esté viendo ya los efectos del riesgo político que tomó al apostarle a unas negociaciones con la guerrilla más antigua del mundo.

Mirada al futuro: apenas es el comienzo

Con todo y este escenario, con avances, obstáculos, retos y riesgos, no hay duda de que los colombianos tienen ahora la oportunidad histórica de ponerle fin al enfrentamiento armado con las FARC y, con ello,

avanzar en el camino hacia la paz. Al menos parcialmente, pues desde los más optimistas hasta los más escépticos, los análisis coinciden en un punto clave: lo que resulte de las negociaciones en La Habana sólo será un acuerdo formal, probablemente con compromisos generales de ambas partes que habrá que materializar. Pero de ninguna manera significará la resolución real al conflicto en Colombia y, mucho menos, de las profundas problemáticas de un país que aún no les ha dado la prioridad que merecen, por haber estado inmerso en la guerra tanto tiempo. Los colombianos tendrían entonces que imaginarse y vivir una Colombia “sin FARC” o “sin conflicto” –algo muy difícil si se tiene en cuenta que todas las generaciones en la actualidad nacieron y han vivido en un país en guerra. Y ahí, en un eventual post-conflicto, es cuando los problemas “secundarios” –unos siempre presentes y otros como consecuencia del acuerdo de paz– pasarán al primer plano y llegará el momento de hacerles frente.

Pero ¿cuáles serían esos problemas que saldrían a la superficie? Algunos de ellos están relacionados directamente con las negociaciones y posibles acuerdos a los que llegarían Gobierno y guerrilla. Por ejemplo, el tema de justicia transicional. Si bien es cierto que no se puede admitir impunidad ni indultos totales o leyes de “punto final”, también hay que reconocer que sociedad y Estado colombianos tendrán que encontrar una fórmula que tenga en cuenta la complejidad de una guerra de tantos años, permita un balance entre justicia, verdad y reparación, y sea consecuente con los estándares internacionales. En relación con lo anterior, se encuentra otro reto –que coincide con el segundo punto de la agenda de los diálogos con las FARC– y es la garantía de la participación política para los desmovilizados de la guerrilla. En febrero de 2013 Iván Márquez declaró que quiere hacer política abierta y legalmente, a lo cual el procurador Alejandro Ordóñez respondió que quienes tengan condenas no podrán participar en política, mucho menos quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Esto dejaría a toda la comandancia de las FARC –quienes están sentados hoy en día en la mesa– sin posibilidades de participar en elecciones o ejercer

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

KOLUMBIEN

DR. HUBERT GEHRING
MARGARITA CUERVO

Mai 2013

www.kas.de/kolumbien

cargos públicos. Ante esto, habrá que encontrar también una fórmula ideal para no sacrificar la justicia pero sí abrir espacios para la participación en política por parte de grupos representativos de las FARC, una vez desmovilizado el grupo, en el marco de la democracia. Tampoco hay que olvidar que aunque la agenda sólo tenga cinco puntos, asuntos tan complejos como la solución al problema del narcotráfico y la reparación para las víctimas van a requerir grandes esfuerzos, durante muchos años y con el apoyo de la comunidad internacional.

Pero más allá de lo anterior, hay asuntos estructurales y que tienen que ver con el tipo de sociedad que se plantean los colombianos si quieren construir una paz estable y duradera. Temas como la pobreza, la inequidad, el desempleo, las falencias en materia de infraestructura, entre otros, son puntos a resolver y que sin duda comenzarán a adquirir mayor relevancia en un eventual postconflicto. Por ejemplo, además de diseñar y ejecutar políticas que atiendan de forma estructural la pobreza –34% en ciudades y 46% en el campo– y los niveles de inequidad que sitúan a Colombia como el 3er país más desigual del mundo, el país deberá comenzar a hacer grandes inversiones en infraestructura si quiere ser competitivo y ofrecer oportunidades de desarrollo para los sectores de la economía que mayor empleo generan. En un país en el que el 80% de la carga se mueve por carreteras, los costos logísticos para los comerciantes no pueden representar más del doble que en aquellos países con los que tiene TLCs. Y si se buscan soluciones de fondo al tema del narcotráfico, la inversión en programas de desarrollo alternativo no puede venir casi exclusivamente de la cooperación internacional y las vías para el transporte y comercialización de los productos no deberían suponer costos superiores a los ingresos que reciben los trabajadores rurales, como es el caso de muchos de ellos hoy en día.

Otro tema a resolver, que también tiene relación con la agenda de los diálogos, son las garantías para la oposición en el marco de un sistema democrático, sobre todo luego de una eventual desmovilización de grupos de guerrilla. Hay experiencias del pasado de

las que hay que aprender, por ejemplo, el caso de la Unión Patriótica –UP–, partido político de izquierda fundado en los años ochenta como opción política legal de algunos desmovilizados del ELN y las FARC; y el caso del movimiento político Alianza Democrática M-19, formado luego de la desmovilización de la guerrilla del M-19 en 1990. Varios puntos podrían aportar como lecciones del pasado y el presente. En primer lugar garantías en términos de seguridad para quienes busquen participar desde la democracia. Al respecto, hay que recordar que miles de miembros de la UP fueron asesinados durante esos años por grupos de paramilitares y narcotraficantes, dentro de ellos 2 candidatos presidenciales y 8 congresistas; de igual forma, el candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro, fue asesinado en 1990. Otro aprendizaje valioso es que sí es posible abrir esos espacios de participación, con garantías y casos exitosos. Por ejemplo, luego del asesinato de Pizarro, otro desmovilizado del M-19, Antonio Navarro Wolff, asumió la candidatura y logró el tercer lugar, para luego ser elegido como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, Navarro fue nombrado ministro de salud en el gobierno de Gaviria (1990-1994), fue elegido alcalde de Pasto, cargo que le mereció el premio al “mejor alcalde” en 1998; luego fue representante a la cámara, senador y gobernador de Nariño. Pero de estas experiencias también hay lecciones respecto a la dificultad del gobierno democrático para quienes están en la oposición: Gustavo Petro, desmovilizado del M-19, ha tenido una larga y exitosa carrera política, especialmente como congresista, ejerciendo un rol de opositor riguroso y con amplio apoyo popular. Pero actualmente, en su cargo como alcalde de Bogotá, cuenta con muy bajo respaldo (30%) y ha enfrentado diversas crisis por problemas de gestión, lo cual ha llevado a cuestionar su capacidad como administrador de la ciudad.

En fin, el camino no es fácil y está lleno de retos que habrá que comenzar a asumir desde antes de la firma de un eventual acuerdo con la guerrilla, abonando el terreno para una sociedad en paz de manera sostenible.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

KOLUMBIEN

DR. HUBERT GEHRING

MARGARITA CUERVO

Mai 2013

www.kas.de/kolumbien

Desarrollos recientes: primeros resultados en la Habana – Anuncios de Santos acerca de su candidatura a la reelección

Al parecer se lograron resultados positivos acerca del primer punto de la agenda a finales de mayo: la llamada reforma agraria. Los negociadores del Gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo. En un documento plantearon las bases para una “reforma agraria”. Esto sería el “comienzo de transformaciones radicales”. El presidente Santos celebró el anuncio como un “paso fundamental”. Este paso le da esperanza a las partes y probablemente también a muchos colombianos, y muestra que aparentemente es posible concretar acuerdos con las FARC. Al mismo tiempo hay una impresión extraña. Desde el inicio de las negociaciones en el segundo semestre del 2012, Santos aclaró un principio de las conversaciones: “Nada está negociado hasta que todo esté negociado”. Esto pondría un manto de duda sobre las posturas más triunfalistas que en el momento se difunden intensamente.

Por eso sólo resta concluir que Santos quiere –o más bien– debe generar un ambiente de “optimismo” entre los colombianos a través de este anuncio sobre el éxito del primer punto de la agenda. Esto significaría que la campaña para elecciones a Congreso y Presidencia en 2014, así como las siguientes negociaciones en la Habana se llevarán a cabo en paralelo. En ese caso se avecinan fuertes confrontaciones. Santos se juega todo en esta fase!



Fuente: Presidencia de la República de Colombia

Valdría la pena preguntarse si con esto Santos está tratando de dar un impulso a los anuncios indirectos de hace algunas semanas sobre su posible candidatura a la reelección. Al menos parece necesitarlo, pues las recientes encuestas muestran un panorama no muy positivo para él. A esto se suma que el plazo que él mismo fijó para un acuerdo -octubre 2013– muy probablemente no se pueda cumplir. Aún faltan cuatro puntos de la negociación, no menos complejos.